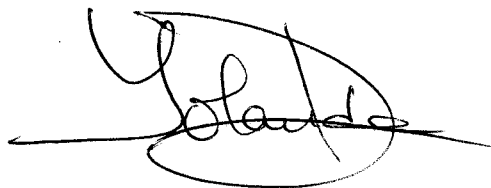


A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea, a iniciativa de su diputada **Yolanda Díaz Pérez**, conforme recoge el **artículo 185 del reglamento** del Congreso, presenta la siguiente **Pregunta Escrita** relativa al coste del proceso de reestructuración bancario de NovaCaixaGalicia Banco.

Congreso de los Diputados, 19 de enero de 2017



Fdo.: Yolanda Díaz Pérez

En Marea

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Tribunal de Cuentas en su último informe (aprobado el 10 de enero de 2017), relativo a la fiscalización del proceso de reestructuración bancaria en el periodo comprendido entre los años 2009 y 2015, detalla que el coste del proceso de reestructuración de NovaCaixaGalicia Banco (NCG) ha sido para ese periodo de 9.159 millones de euros.

NovaCaixaGalicia se encuentra, así, entre las 4 entidades bancarias que han supuesto un mayor coste para las arcas públicas, junto con Catalunya Caixa, BFA/Bankia y Banco CAM.

El *Informe sobre la Gestión y Actuación del FROB* del tercer trimestre de 2016 indicaba que la Comisión Rectora del FROB acordó, con fecha 18 de diciembre de 2013, la adjudicación del 88,33% de las acciones de NCG (propiedad del FROB y del FGD) a Banco Etcheverría-Grupo Banesco. El 25 de junio de 2014 se dio efectivo cumplimiento al contrato de compraventa. El precio de venta se fijó en 1.003 millones de euros, de los que el 71,03% correspondían al FROB y el 28,97% al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). A esto hay que añadir que con anterioridad, el 12 de enero de 2012, ya se había vendido el 2,59% del capital de NCG propiedad del FROB, por 71 millones de euros. En conjunto, por tanto, la venta de NCG ha supuesto el ingreso de 1.074 millones de euros (783 millones para el FROB y 291 millones para el FGD).

En definitiva, las aportaciones de capital a NovaCaixaGalicia que se consideran coste definitivo del proceso de reestructuración ascendieron a un total de 8.780 millones de euros (8.269 millones corresponden al FROB y 511 millones al FGD).

Pero el coste no va a quedar ahí, dado que la operación de privatización en que ha consistido la venta al Banco Etchevarría-Grupo Banesco de la entidad, no excluye los riesgos que seguiremos asumiendo en el futuro, aunque NovaCaixaGalicia (ahora ya Abanca) ya no forme parte de la propiedad pública y que podrían alcanzar varios miles de millones de euros adicionales, en base a las garantías y avales concedidos en el proceso de venta, en el traspaso de activos a la SAREB, o en la cobertura de los préstamos del Banco Central Europeo.

El último *Informe sobre la gestión y la actuación del FROB*, correspondiente al tercer trimestre de 2016, indica que de los 1.003 millones de euros a pagar por parte del Banco Etchevarría-Grupo Banesco se ha hecho efectivo el pago de 703,09 millones de euros. Por lo que inicialmente quedarían por pagar 299,91 millones de euros.

Pero durante el periodo objeto del informe, se han materializado en su totalidad dos de las garantías otorgadas en el proceso de venta de la entidad (garantía Sareb y garantía por acuerdo banca-seguros con Aviva).

Además, existen otras garantías que se van reconociendo trimestralmente según las reclamaciones presentadas por la entidad: la garantía por mala comercialización de híbridos, de coberturas de tipos de interés y de cláusulas suelo. Hasta el 30 de septiembre de 2016, ha habido reconocimientos trimestrales por dichas garantías referidos a los dos últimos trimestres de 2014 y a los cuatro trimestres de 2015.

El pago definitivo de las citadas garantías solo se efectúa en la medida en que el importe del precio aplazado por la venta de las acciones haya sido íntegramente satisfecho, o cuando el importe de las garantías reconocidas y no pagadas supere el precio pendiente de pago, en cuyo caso se abonará la diferencia.

Al cierre de junio de 2016, el importe acumulado de las garantías reconocidas ascendía a 302,19 millones de euros. En consecuencia, el pasado 29 de junio FROB efectuó un pago en concepto de garantías otorgadas por la venta de NovaCaixaGalicia por importe de 2,27 millones de euros, diferencia entre el importe acumulado de garantías reconocidas y el precio pendiente de pago. O sea, el Grupo Banesco ya ha saldado su deuda por la adquisición de NovaCaixaGalicia, y aún está recuperando dinero en base a las garantías establecidas en el contrato de compra.

Además, a cierre de septiembre de 2016, está pendiente de formalizarse un reconocimiento de garantías trimestrales por importe de otros 9,6 millones de euros, con lo que las garantías reconocidas ascenderían a 311,8 millones de euros. Estos 9,6 millones de euros habrá que pagárselos al Grupo Banesco en breve plazo.

En suma, y añadiendo estos importes al coste de las actuaciones, una vez descontados los ingresos, tenemos una salida de 9.091,8 millones de euros públicos. Mientras que el precio real pagado por el Grupo Banesco disminuye hasta los 691,2 millones de euros.

A todo ello hay que sumar la asunción de nuevos compromisos ligados a las garantías concedidas y que en algún caso han de ser objeto de materialización inmediata, como las relacionadas con la devolución de importes ilegalmente cobrados por las cláusulas suelo, en seguimiento del reciente veredicto del Tribunal de Justicia de la UE concediendo la retroactividad total para estas devoluciones.

Y mientras por parte de las arcas públicas se van asumiendo todas las pérdidas asociadas a la actividad, primero de Caixa Galicia y Caixanova, después, de Novacaixagalicia Banco, y por último, de Abanca, según los datos hechos públicos por la propia entidad bancaria, ya en 2014 era el tercer banco de España por beneficios, detrás del BBVA y el Banco Santander, con un superhábit de 1.157 millones de euros.

A raíz de estos datos, el nuevo equipo directivo de Abanca llegó a anunciar que amortizarían de manera anticipada el dinero que aún le debían al FROB y para el que tenían de plazo hasta junio de 2018. Sin embargo, sólo se pagó parte de esta deuda, a pesar de que en declaraciones públicas el vicepresidente de la entidad, Juan Carlos Escotet, señaló que *“veía razonable el adelanto de ese dinero dada la holgura de los resultados de la entidad”*.

En resumen, nos encontramos ante la paradoja de que en tan sólo un año la entidad generó el beneficio suficiente para amortizar su adquisición, con lo que de nuevo surge la duda de si el FROB vendió muy barato nuestras cajas de ahorros, o bien si fue apropiado ofrecer tal montante de garantías y avales, y en última instancia si era necesario privatizar unas entidades cuyo saneamiento había costado tanto a las arcas públicas, mientras que su conservación bajo titularidad pública hubiera servido para resarcir estas cuantiosas pérdidas.

Y ante todo lo expuesto no parece existir responsable alguno de este colosal quebranto económico para las arcas del Estado. Parece que las responsabilidades de la quiebra y el posterior rescate no son de nadie. Como indicó en su momento la Audiencia Nacional, *“la mala gestión no es delito”*. Pero sí que hay responsables:

Los directivos José Luis Méndez López y Julio Fernández Gayoso (ingresó en prisión el pasado 16 de enero), máximos responsables de Caixa Galicia y Caixanova durante los últimos años y todos los miembros de los consejos de administración de las cajas, no pueden eludir su responsabilidad por la desastrosa actuación que llevó a sus entidades a la nacionalización. Resulta vergonzoso que las únicas actuaciones penales se hayan puesto en marcha solamente por la percepción de millonarias indemnizaciones, olvidando los efectos de la gestión en los años previos a la fusión, el falseamiento de las cuentas anuales año tras año con el objeto de retrasar el reconocimiento de las pérdidas y la adopción de medidas extremadamente arriesgadas que comprometieron, aún más si cabe, el futuro de sus entidades.

Deloitte y PWC supervisaron los estados contables de las cajas antes de la fusión y dieron opinión favorable sin salvedad alguna en sus informes. En ningún momento dieron la voz de alarma ante el deterioro de sus carteras de créditos y de las inversiones excesivamente arriesgadas en participadas. No alertaron de sus necesidades de capital. A partir de la fusión, las cuentas anuales de NCG Banco fueron encargadas a Deloitte, que mantuvo idénticos criterios, que se han manifestado absolutamente insuficientes para evaluar el estado de compañías que solamente descubren las pérdidas que ocultan en sus balances tras su nacionalización. ¿Para qué sirven entonces los informes de auditoría?

El Banco de España, por su parte, ha protagonizado una lamentable actuación en todo el proceso. En los años de crecimiento desaforado de los balances de Caixa Galicia y Caixanova hizo caso omiso a su obligatoria labor de supervisión y de actuación para evitar la situación de insolvencia de las cajas. Cuando el problema estalló, aunque era plenamente consciente de la profundidad del mismo, actuó de manera claramente insuficiente amparando la nefasta actuación de los directivos de las entidades. Cuando sus inspecciones detectaron las enormes necesidades de capital que ambas cajas de ahorro tenían, optó por autorizar una fusión que no solucionaba el problema de solvencia existente.

Por último, todo lo anterior no habría sido posible sin la negligente actuación del Ministerio de Economía, especialmente desde el año 2003, que se agudizó en la gestión que de la crisis de estas dos cajas de ahorro gallegas ha realizado el FROB. La estrategia política ha consistido en salvaguardar a los acreedores privados de las entidades bancarias en detrimento del dinero público. Eso ha puesto en riesgo los depósitos del conjunto de los ahorradores. El retraso en el reconocimiento del problema y en la recapitalización de las entidades ha agudizado los daños en las entidades nacionalizadas. Por último, el opaco proceso de privatización de la entidad fusionada ha supuesto el reconocimiento de un descomunal expolio de dinero público sin que pueda por esta operación considerarse que la sangría no pueda ser mayor en el futuro.

Había otras alternativas para haber salvado los ahorros depositados en las cajas de ahorros y en NovaCaixaGalicia Banco y, al mismo tiempo, minimizado el coste para el Estado de este rescate. Sin embargo, se optó por un proceso de sustitución de acreedores que hizo que el volumen de pasivo soportado de hecho por el Estado fuera enorme, imposibilitando de ese modo otro tipo de actuaciones menos lesivas para los intereses generales.

Se debieron sanear los agujeros patrimoniales de las quebradas entidades haciendo recaer las pérdidas sobre sus accionistas y, a continuación, sobre los inversores en títulos de deuda de las entidades. Y después de nacionalizar las entidades para salvaguardar a los ahorradores, la obligación del FROB hubiera sido gestionarlas adecuadamente dentro del perímetro de una banca pública orientada a la obtención de una rentabilidad económica para el Estado y social para los ciudadanos.

Pero no se ha hecho nada de esto, lo que se ha hecho es socializar las pérdidas y privatizar los beneficios, lo mismo que se hace de nuevo con la gestión de los hospitales o de las autopistas.

Primero se permitió un modelo de gestión ilícito y criminal, desfalcando las cajas de ahorro y metiéndolas de lleno en el negocio especulativo: partidismo, amiguismo, clientelismo, expolio de fondos, prácticas abusivas, estafa, remuneración desmedida de directivos y consejeros...

Después se le echó la culpa a las cajas de ahorros de la crisis financiera en España. Los poderes políticos, económicos y mediáticos lanzaron su mensaje: “El problema son las cajas de ahorro”. Que sigue la línea de “la gestión privada es mejor que la pública”. Mentira. Bancos y cajas tenían los mismos problemas: en 2010 bancos y cajas tenían niveles similares en cuanto a cifras de morosidad, nivel de exposición a activos tóxicos y problemas de insolvencia.

Así, se procedió a su nacionalización, saneamiento y posterior venta a entidades privadas. Lo que había detrás de esto: la mitad del negocio bancario español de créditos y depósitos estaba en 2010 en manos de las Cajas de Ahorro. Su privatización supondría un buen negocio para la banca privada.

Todo este proceso ha sido una tremenda estafa, un desfalco, un agujero que va a seguir consumiendo fondos públicos, que pagan los españoles con sus impuestos, durante no se sabe bien cuanto tiempo.

Y ante esto, el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos -En Comú Podem – En Marea se pregunta: ¿no es esto una cadena de delitos continuados contra los intereses generales? ¿Cuándo se asumirán responsabilidades políticas, económicas y penales por todo esto?

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea presenta las siguientes **preguntas escritas**:

1. ¿Cuál va a ser el coste total del proceso de reestructuración bancaria de NovaCaixaGalicia Banco?
2. ¿Considera el Gobierno que fue prudente vender tan pronto la participación estatal de NovaCaixaGalicia Banco y a tan bajo precio?
3. ¿Qué razones objetivas llevaron al gobierno a privatizar NovaCaixaGalicia Banco una vez saneado, perdiendo con ello la posibilidad de mantener un servicio público y a su vez recuperar lo invertido en su saneamiento?
4. ¿Cuánto le va a costar a las arcas públicas la devolución de las cláusulas suelo?
5. ¿A cuánto van a ascender los costes por los diferentes avales y garantías ofrecidas por el Estado en el marco del proceso de reestructuración bancaria?
6. ¿Cuál es la situación actual del Fondo de Garantía de Depósitos?
7. ¿Conoce el Gobierno si el Fondo de Garantía de Depósitos tiene fondos suficientes para cumplir su objetivo, que es cubrir a los depositantes en caso de quiebra por insolvencia de sus bancos?

8. ¿Cuáles fueron los criterios seguidos para tomar la decisión de sanear con dinero público las entidades en riesgo de quiebra y después vender las participaciones del Estado a corporaciones privadas?
9. ¿Se realizó algún estudio, análisis o valoración sobre el coste de oportunidad que suponía anular la posibilidad de contar con un sector financiero público que cumpliera, realmente, con una función social?
10. ¿Cuáles fueron los objetivos concretos perseguidos por medio de la socialización de las pérdidas y la privatización de los futuros beneficios en todo este proceso?